

GOBIERNO DE PUERTO RICO18^{va} Asamblea
Legislativa2^{da} Sesión
Ordinaria**SENADO DE PUERTO RICO****P. del S. __**

DE OCTUBRE DE 2017

Presentado por los señores *Rivera Schatz; Seilhamer Rodríguez; Ríos Santiago; Martínez Santiago; Berdiel Rivera; Correa Rivera; Cruz Santiago*; la señora *Laboy Alvarado*; los señores *Laureano Correa; Muñiz Cortés; Nazario Quiñones; Neumann Zayas*; las señoras *Nolasco Santiago; Padilla Alvelo; Peña Ramírez*; los señores *Pérez Rosa; Rodríguez Mateo; Romero Lugo; Roque Gracia*; las señoras *Vázquez Nieves y Venegas Brown*

Referido a la Comisión

LEY

Para crear la “Ley del Nuevo Gobierno de Puerto Rico”, a los fines de reafirmar la estructura organizacional y administrativa constitucional de la Rama Ejecutiva del Gobierno de Puerto Rico; enumerar los departamentos constitucionales; disponer lo relacionado al cargo de Gobernador de Puerto Rico; disponer el orden de sucesión del cargo de gobernador en caso de que no pueda cumplir con sus funciones; facultar al Gobernador de Puerto Rico la autoridad de administrar la Rama Ejecutiva, sus servicios, sus programas, su funcionamiento y composición; facultar al Gobernador de Puerto Rico a maximizar los recursos y personal de la Rama Ejecutiva mediante la transferencia, consolidación, reorganización, externalización, supresión y creación de nuevas y más eficientes estructuras gubernamentales y agencias; disponer la supletoriedad de las Leyes orgánicas de las agencias del ejecutivo; autorizar al Gobernador a reorganizar, externalizar, consolidar y suprimir, agencias, programas y servicios de la Rama Ejecutiva mediante Orden Ejecutiva; disponer los poderes y facultades de los jefes de agencia; derogar la Ley 182-2009, conocida como “Ley de Reorganización y Modernización de la Rama Ejecutiva 2009”; derogar la Ley Núm. 7 de 24 de julio de 1952, según enmendada; y para otros fines relacionados.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Introducción

El Gobierno de Puerto Rico es una estructura compleja y no responde a nuestras necesidades presentes y futuras. Actualmente, la Rama Ejecutiva se compone de sobre 100 agencias que proveen 340 servicios, a un costo de \$20,000 millones anuales. Es un gobierno excesivo, disfuncional, complejo, burocrático, entorpecedor de procesos y poco transparente en sus decisiones, lo cual mina su credibilidad ante los ciudadanos, el gobierno federal, los bonistas y las casas acreditadoras.

Históricamente, el Gobierno no ha cumplido con sus obligaciones, ha tenido gastos excesivos en todo su andamiaje ejecutivo y ha cubierto sus necesidades a costa de aprobar más medidas impositivas y coger prestado. La falta de dirección fiscal y de un plan abarcador y estratégico de desarrollo económico no le ha permitido al Gobierno lidiar con los retos actuales ni, mucho menos realizar un pronóstico preciso para aprovechar, prevenir o mitigar efectos relacionados a cambios en la economía. El Gobierno también ha sufrido de una falta de prioridades fiscales, desigualdad en la remuneración de empleados que realizan la misma labor (dependiendo de la agencia de gobierno en la que trabajen), y de falta de motivación e incentivos en la fuerza laboral gubernamental dirigidos a lograr un mejor servicio público. Esta ineficiencia impide responder adecuadamente a emergencias como las ocurridas con el paso de dos huracanes en un mes.

Los programas, sistemas y la infraestructura tecnológica actuales del gobierno son sumamente ineficientes y complejos, y no añaden valor al resultado final. Todavía existen procesos manuales que hace tiempo pudieron ser automatizados. Además, se utiliza un modelo de servicio fragmentado, que carece de controles y procesos uniformes y efectivos, lo que genera un alto nivel de desinformación, y redundancia entre los distintos departamentos o agencias. Existen estructuras administrativas obsoletas, un exceso de niveles de supervisión en algunas agencias, personal realizando tareas innecesarias y, en muchos casos, se desperdicia el potencial del recurso humano disponible. Por la falta de visión, planificación, cooperación y coordinación, también hay un exceso de facilidades u oficinas pertenecientes al gobierno que se encuentran total o parcialmente en desuso en distintos municipios.

En el Plan para Puerto Rico, plataforma que fue avalada por los electores en las elecciones de 2016, el gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, se comprometió a crear un Nuevo Gobierno que sea justo, sensible, eficiente, efectivo, íntegro, transparente y ágil en la administración pública.

Para lograr la modernización de la estructura gubernamental, desde que tomamos las riendas de Puerto Rico, hemos comenzado a reformular el actual modelo burocrático y a reducir el gasto en estructuras gubernamentales eliminando la redundancia, consolidando funciones, facilitando la transferencia de empleados, fusionando algunas dependencias, descentralizando servicios, utilizando la tecnología para simplificar procesos e interconectar todas las agencias y corporaciones públicas, entre otras medidas. Ello, con el objetivo claro de no permitir ni un despido

de empleados públicos. A tales fines, hemos tomado, entre otras, las siguientes iniciativas en el ámbito gubernamental:

- a. Ley 8-2017, que crea un sistema de Empleador Único en el Gobierno de Puerto Rico;
- b. Ley 20-2017 que crea el Departamento de Seguridad Pública;
- c. Ley 26-2017 que crea el andamiaje legal para cumplir con el Plan Fiscal certificado conforme a PROMESA;
- d. Ley 75-2017 que transforma la Comisión del Servicio Público para consolidar funciones y evitar redundancias;
- e. Ley 81-2017 que deroga la Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales;
- f. Ley 106-2017 que garantiza las pensiones y reestructura los sistemas de retiro;
- g. Ley 109-2017 que autoriza la Reestructuración de la Deuda del Banco Gubernamental de Fomento;
- h. OE-2017-02 que crea el Centro de Oportunidades Federales;
- i. OE 2017-05 que ordena la implementación del método de presupuesto Base Cero;
- j. OE 2017-014 y OE 2017-015 que crean el cargo de Chief Information Officer y el Puerto Rico Innovation and Technology Service (PRITS).
- k. OE 2017-19 que crea el cargo de Principal Oficial de Administración y Operación del Estado ("Chief Administrative and Operating Officer") y Principal Oficial de Planificación Estratégica del Estado ("Chief Strategic Planning Officer").
- l. Proyecto de la Cámara 1124 que crea el Nuevo Departamento de la Familia.

Esta Administración tiene como prioridad el empoderamiento de los ciudadanos en el quehacer gubernamental estableciendo alianzas estratégicas con organizaciones no-gubernamentales, organizaciones sin fines de lucro, municipios, consorcios y la red de escuelas para optimizar los servicios que provee. De igual forma, esta Administración ha estado trabajando sin parar en evaluar el funcionamiento interno del Gobierno, teniendo una visión de cómo sería el Gobierno de Puerto Rico si se fuera a comenzar desde cero para lograr el diseño de una estructura ágil, productiva y eficiente.

Ciertamente, no es posible comenzar desde cero. El Nuevo Gobierno que perseguimos crear consiste de un proceso de transición hasta alcanzar el gobierno que deseamos tener. El análisis exhaustivo que hemos estado llevando a cabo sobre la estructura gubernamental, nos ha permitido identificar los servicios que pueden ser consolidados o traspasados a otras agencias, o externalizados para que sean prestados por entidades no gubernamentales. Durante ese proceso, estaremos trabajando con la reingeniería de las agencias y corporaciones públicas, implementando las eficiencias que le permitan al Gobierno ir maximizando sus recursos, hasta transformarse en el Nuevo Gobierno que tanto necesitamos.

La punta de lanza de esta iniciativa es la Ley 8-2017, según enmendada, conocida como "Ley para la Administración y Transformación de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico". Gracias a esta Ley, se está implementando en Puerto Rico el concepto del Gobierno como "Empleador Único". Esto permite una mayor eficiencia y agilidad gubernamental, ya que permite

la movilidad entre empleados públicos para que éstos puedan ser utilizados donde sean necesarios para maximizar los servicios a la ciudadanía. La reingeniería que buscamos llevar a cabo, necesita que los recursos humanos estén ubicados donde hagan falta. El resultado de esta Ley y la visión del Gobierno como un empleador único que pueda maximizar sus recursos y dirigirlos a las áreas donde se necesitan, ya se está implementando.

Reestructuración Gubernamental

El Plan para Puerto Rico que impulsa esta Administración y que fue refrendado por el Pueblo en las pasadas elecciones generales por medio del ejercicio democrático del voto, propone implementar una nueva estructura de gobierno que baje significativamente el gasto público y mejore sustancialmente sus funciones. Para lograr esto, se requiere la evaluación concienzuda de los servicios que provee el gobierno, a fin de determinar cuáles pueden ser consolidados, delegados a otros sectores o eliminados porque ya no son necesarios. Todo ello, sin que conlleve despidos de empleados públicos, sino la movilización de los mismos acorde con la necesidad de servicios de nuestros ciudadanos.

Cónsono con lo anterior y, como parte de las primeras medidas tomadas por esta Administración para atajar la crisis fiscal mediante la reingeniería de la estructura gubernamental, se aprobó la Ley 8-2017, conocida como “Ley para la Administración y Transformación de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico”. Esta Ley, convierte al Gobierno en un Empleador Único para que los funcionarios públicos pasen a ser empleados del Gobierno y no de sus diferentes entidades, permitiendo así la mejor utilización de los recursos humanos donde exista una necesidad apremiante mediante el mecanismo de movilidad, sin que el empleado tenga que renunciar al puesto que ocupa y comenzar de nuevo en otra instrumentalidad gubernamental. Mediante la movilidad, se pretende reforzar el entendimiento de lo que significa el equilibrio entre la fuerza laboral y la prestación de servicios públicos. De esta manera, protegemos los empleos de nuestros servidores públicos mientras obtenemos una distribución eficiente del recurso humano del Gobierno y creamos una estructura gubernamental ágil, basada en la evaluación continua de necesidades,.

Responsabilidad Fiscal bajo PROMESA

Las políticas del pasado, junto a nuestra indefensión colonial, llevaron al Congreso de los Estados Unidos a promulgar la ley denominada *Puerto Rico Oversight, Management, and Economic Stability Act*, conocida como PROMESA (por sus siglas en inglés), Pub. L. 114-187, y delegó poderes en una Junta de Supervisión Fiscal (en adelante “Junta de Supervisión”) que es producto de nuestro estatus colonial. Nuevamente, por no tener representación plena en el Congreso, dicha Ley se aprobó sin una verdadera participación de nuestro Pueblo. Conforme a PROMESA, las continuas acciones de planificación fiscal, las acciones presupuestarias, legislativas y ejecutivas de Puerto Rico, así como las reestructuraciones de deuda, consensuales o no, y la emisión, garantía, intercambio, modificación, recompra o redención de deuda, están sujetas a supervisión.

Cuando asumimos las riendas del Gobierno, nos encontramos con un déficit en caja de más de \$7,600 millones según certificado por el Tesoro Federal y la Junta de Supervisión. Se trataba de un gobierno sin acceso a los mercados de capital, con un crédito de categoría chatarra, sin

liquidez, sin transparencia en las finanzas públicas, con un gasto gubernamental inflado y con deudas de miles de millones de dólares. Además, el gobernador enfrentaba la titánica tarea de recuperar la credibilidad ante el mercado y ante la Junta de Supervisión. Nueve meses después, hemos logrado importantes adelantos con nuevos retos como la devastación causada por dos huracanes.

Desde el 2 de enero hemos estado implementando un plan concertado para controlar el gasto gubernamental, reactivar nuestra economía y facilitar las condiciones para la creación de más y mejores empleos en el sector privado. Se ha controlado el gasto, paralizado la contratación de empleados y ha comenzado la reingeniería del Gobierno con iniciativas concretas. Estamos demostrándole al mundo que Puerto Rico está abierto para hacer negocios en un ambiente de seguridad y estabilidad gubernamental aun con la emergencia por la que atravesamos en la actualidad.

El pasado 28 de febrero de 2017, el Gobernador presentó un Plan Fiscal completo, abarcador, real y, a la misma vez, sensible a las necesidades de nuestro Pueblo y de los más vulnerables que no conllevaba despedir empleados públicos ni la reducción de su jornada y beneficios. El 13 de marzo de 2017, la Junta de Supervisión aceptó y certificó nuestro Plan Fiscal garantizando que no habrá despidos de empleados públicos, manteniendo el acceso a servicios de salud a nuestro Pueblo y protegiendo las pensiones de los más vulnerables y tornando innecesaria cualquier reducción a la jornada laboral de nuestros empleados públicos.

El Plan Fiscal supone una reestructuración gubernamental que permite ahorros presupuestarios y eficiencia. Las medidas presentadas por el gobernador y aprobadas por esta Asamblea Legislativa durante estos primeros meses de mandato han cambiado el rumbo de Puerto Rico a uno de responsabilidad fiscal. No obstante, aún falta mucho por hacer.

El Plan Fiscal certificado por la Junta de Supervisión Fiscal propone una reducción de \$17,800 millones en los próximos 10 años en medidas para reducir el tamaño del Gobierno y mejorar la eficiencia gubernamental. Este proyecto abarcador tiene retos adicionales creados por la madre naturaleza que ha devastado gran parte de nuestra infraestructura y comercio. Nuestro plan indica que el Gobierno debe transformarse de manera que pueda ofrecer los servicios importantes a sus ciudadanos de una manera eficiente y fiscalmente responsable incluso en momento de emergencia. Esto se logra a través de la movilización, ya permitida por la Ley 8-2017, la externalización de servicios y la integración de programas redundantes, promoviendo así la centralización de los servicios y su mejoramiento.

De las 3 iniciativas que se han esbozado en el Plan Fiscal, 2 de ellas, el Empleador Único y la uniformidad de los beneficios marginales de los empleados públicos, ya han sido logrados con la Ley 8 y 26, respectivamente. El Plan Fiscal también provee para mayor externalización de servicios, así como reducción en subsidios. Aunque ya hemos comenzado, aún continuamos trabajando con el rediseño del aparato gubernamental para generar ahorros de sobre \$6,000 millones en 10 años con el reto adicional de interrupción de ingresos y efectos negativos en la economía productos de los dos huracanes del pasado mes.

Un Nuevo Gobierno

Consistente con la política pública antes esbozada, proponemos un sistema novel para reorganizar el Gobierno de Puerto Rico. Un sistema que permita atajar la crisis fiscal y financiera de la Isla, permitiendo y delegando facultades al gobernador de Puerto Rico para reorganizar el ejecutivo, rama de Gobierno de la cual es Jefe, conforme a nuestro sistema republicano de gobierno y el Plan Fiscal.

Esta Asamblea Legislativa, conforme al Artículo III, Sección 16 de la Constitución de Puerto Rico, tiene la facultad de crear, consolidar o reorganizar departamentos ejecutivos y definir sus funciones. Con esa máxima constitucional, en Puerto Rico ha sido la Asamblea Legislativa, quien ha creado, reorganizado, modificado y/o suprimido agencias.

De un análisis de los demás estados de la nación americana, se puede apreciar que 21 de ellos permiten al gobernador reorganizar la Rama Ejecutiva, ya sea en su Constitución o por Ley. Los distintos estados tienen diferentes mecanismos de contrapesos para poder lograr una efectiva reorganización.

En New Jersey, la legislatura estatal delegó la reorganización de la Rama Ejecutiva al Gobernador. En *Brown v. Heymann*, 62 NJ 1; 297 A2d 672 (1972), la Corte Suprema de New Jersey validó la delegación de poderes hecha por la Legislatura estatal al ejecutivo y concluyó que: “There being authority to delegate the legislative power, it does not rest with us to quarrel with the legislative decision to make the delegation.”

Hemos estudiado diferentes modelos estatales, los cuales permiten la reorganización ejecutiva por parte del gobernador con guías de la Legislatura estatal y hemos concluido que el mismo es compatible con nuestro sistema de Gobierno. Tomando en consideración la crisis económica y la emergencia fiscal del Gobierno, así como un estudio comparativo de la reorganización gubernamental en otras jurisdicciones, entendemos que esta delegación de poder es constitucionalmente viable.

Ante la crisis fiscal por la que atraviesa el Gobierno, la situación de emergencia creada por dos huracanes y ante las disposiciones del Plan Fiscal, esta Asamblea Legislativa entiende necesario delegar expresamente al gobernador, aquellos poderes necesarios para poder crear, reorganizar, modificar, suprimir, transferir, consolidar y externalizar, agencias, departamentos, servicios y programas, mediante una orden ejecutiva emitida conforme a las disposiciones de esta Ley de forma temporal para cumplir con los objetivos del Plan Fiscal a 10 años y asegurar servicios a nuestro Pueblo. Esta delegación de poder no la ofrecemos livianamente. Somos del entendimiento que debe ser el gobernador quien diseñe el funcionamiento interno de la rama de gobierno que dirige con las guías establecidas por esta Asamblea Legislativa.

Esta delegación se justifica por la crisis fiscal por la cual atraviesa el Gobierno de Puerto Rico en la actualidad. De igual forma, tiene como base el Plan Fiscal del Gobierno aprobado conforme a PROMESA. Es por tal razón, que la delegación expresa de poderes que hacemos en esta Ley no es ilimitada ni de manera indefinida. La misma tendrá una duración de 10 años, de manera que coincida con el término de vigencia del Plan Fiscal. Luego de estos 10 años, el gobernador dejará de tener los poderes bajo la Ley, pero sus cambios seguirán vigentes salvo que

la Asamblea Legislativa apruebe legislación en contrario. De esta manera, cumplimos nuestras metas a tiempo para salir de una junta colonial que heredamos y rescatar a Puerto Rico de la emergencia fiscal y social por la que atraviesa.

Delegación de Poderes

De un análisis de la jurisprudencia federal, resulta evidente que no está prohibido que el Congreso delegue poderes legislativos. La norma actual de delegación de poderes congresionales es la siguiente: "[C]ongress cannot delegate any part of its legislative power **except under the limitation of a prescribed standard.**" United States v. Chicago, M., St. P. & P.R. Co., 282 U.S. 311, 324 (1931). Véase, además, Buttfield v. Stanaham, 192 U.S. 470 (1904) (se permitió la delegación de poderes en tanto la legislatura estableciera suficientes normas y guías para delimitar el ámbito de autoridad de la agencia). En J.W. Hampton & Co. v. United States, 276 U.S. 394, 409 (1928) se acuñó la norma del principio inteligible: "[I]f Congress shall lay down by legislative act an intelligible principle to which the person or body authorized to fix such rates is directed to conform, such legislative action is not a forbidden delegation of legislative power."

Como bien ha expresado el Tribunal Supremo Federal: "[T]he separation-of-powers principle, and the nondelegation doctrine in particular, do not prevent Congress from obtaining the assistance of its coordinate Branches." Mistretta v. United States, 488 U.S. 361, 372 (1989). Los tribunales han reconocido que la delegación por parte del poder legislativo puede resultar indispensable para el buen funcionamiento del Gobierno: "[C]ongress must be permitted to delegate some of its powers in order to be able to function. The standard is relatively broad because in our increasingly complex society, replete with ever changing and more technical problems, Congress simply cannot do its job absent an ability to delegate power under broad general directives." Véase Id.; Véase además Trade Promotion Authority: Fast Track for the Twenty-First Century?, 12 Wm. & Mary Bill of Rts. J. 979, 998-999 (2004).

Consistente con lo antes expuesto, el Congreso ha delegado y, el Tribunal Supremo Federal ha validado, poderes en el Ejecutivo, especialmente en agencias del Gobierno, siempre que exista un principio inteligible. En ese sentido, se han validado delegaciones a base de principios inteligibles tan amplios como: "justo y razonable" Tagg Bros. & Moorhead v. United States, 280 U.S. 420 (1930); "interés público" New York Central Securities Corp. v. United States, 287 U.S. 12 (1932); "conveniencia, interés o necesidad pública", Federal Radio Comm'n v. Nelson Bros. Bond & Mortgage Co., 289 U.S. 266, 285 (1933); "métodos injustos de competencia", FTC v. Gratz, 253 U.S. 421 (1920).

En Touby v. United States, 500 U.S. 160 (1991), el Tribunal Supremo Federal sostuvo que el Congreso puede "legislate in broad terms" provided the legislation contains "intelligible principles" that serve as guideposts for those individuals or bodies entrusted to carry out the legislative directive." El Tribunal refrendó como principio inteligible "imminent hazard to the public safety". Allí se analizó si una disposición de la Ley de Sustancias Controladas era inconstitucional por delegarle poderes legislativos al Attorney General ya que establecía un procedimiento expedito mediante el cual éste podía criminalizar una sustancia de manera temporal cuando esto fuera necesario para evitar un "peligro inminente para la seguridad." Dicha Ley se validó porque establecía restricciones a la discreción del "Attorney General" para definir la conducta criminal.

Asimismo, en Whitman v. American Trucking, 531 U.S. 457, 474-475 (2001), se validó la delegación de poder hecha a la Environmental Protection Agency (EPA) para adoptar regulación siempre y cuando fuera en protección de la salud pública. Es decir, el Tribunal Supremo federal validó como principio inteligible el requisito de que la regulación adoptada fuera para proteger la salud pública. En fin, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos ha sido extremadamente deferente con las delegaciones hechas por el Congreso al Ejecutivo para ejecutar la política pública. En palabras del juez Scalia del Tribunal Supremo de Estados Unidos: “we have almost never felt qualified to second-guess Congress regarding the permissible degree of policy judgment that can be left to those executing or applying the law.” Whitman v. American Trucking, supra, pág. 475.

Lo anterior ha sido distinguido de cuando el Congreso ha intentado auto delegarse poderes sin seguir los parámetros de la Constitución Federal. El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha invalidado la actuación congresional cuando se auto delega funciones que puedan menguar el Poder Ejecutivo. En INS v. Chadha, por ejemplo, el Tribunal Supremo invalidó un veto legislativo porque evadía el procedimiento establecido en el Artículo I, Sección 7 de la Constitución Federal, que requiere que una ley sea aprobada por ambos cuerpos legislativos y sea firmada por el Presidente. La mayoría de los Jueces entendió que al eludir dicho proceso, ello representaba una abrogación de poder congresional mayor en menoscabo del poder ejecutivo, debilitando a este último. Véase Daryl J. Levinson, The Supreme Court 2015 Term: Foreword: Looking for Power in Public Law, 130 Harv. L. Rev. 33, 68 (2016). Al distinguir entre la auto delegación y la delegación en otras ramas de poder, el Juez Stevens señaló lo siguiente: “[I]f Congress were free to delegate its policymaking authority to one of its components, or to one of its agents, it would be able to evade “the carefully crafted restraints spelled out in the Constitution.”... **That danger - - congressional action that evades constitutional restraints -- is not present when Congress delegates lawmaking power to the executive or to an independent agency.**” Bowsher v. Synar, 478 U.S. 714, 755 (1986) (Opinión Concurrente del Juez Stevens).

Nótese que, como bien destaca el profesor Levinson, el Tribunal Supremo de Estados Unidos invalidó el veto Congresional de INS v. Chadha porque le restaba poder a la Rama Ejecutiva sin seguir el proceso legislativo luego de hacer una delegación de poder. Sobre este aspecto el Juez Stevens señaló en Bowsher, que el Congreso puede delegar sus poderes al Ejecutivo pero no puede auto delegarse poderes que puedan disminuir los poderes del Ejecutivo. Esta apreciación del Juez Stevens es consistente con las determinaciones del Tribunal Supremo Federal donde ha validado la delegación de poderes congresionales legislativos mediante principios inteligibles.

De otra parte, una vez exista una delegación de poderes congresionales al ejecutivo, este último, y no el Congreso, es quien debe interpretar el estatuto para determinar su significado y ejecutar la política pública plasmada conforme lo mandata la Constitución. Sobre este particular el profesor Thomas W. Merrill expone lo siguiente:

Even though the President and the entities that assist the President in the execution of law have no inherent power to “make law,” once Congress has delegated authority to executive actors under law, the executive agencies must determine what that law means, and need not await a further delegation of interpretative authority from Congress to do so.

The constitutional basis for an inherent executive power to interpret the law is straightforward. The Constitution expressly grants the President "executive power," and directs the President to see that the laws are "faithfully executed." The conferral of these powers would seem to presuppose that the President and those who serve under his direction have the capacity to ascertain the meaning of the law.

Thomas W. Merrill, Judicial Deference to Executive Precedent, 101 Yale L.J. 969, 1004 (1992) (Citas omitidas.).

La doctrina de delegación de poderes legislativos en Puerto Rico

En Puerto Rico se ha acogido abiertamente la doctrina de delegación de poderes legislativos a las entidades administrativas que pertenecen al poder ejecutivo. En la actualidad, "es incuestionable la validez de la delegación siempre y cuando la ley habilitadora que crea la agencia u organismo administrativo, establezca normas adecuadas, pautas, estándares, criterios, o principios inteligibles o aquellas garantías o salvaguardas procesales y sustantivas que sirvan de guía a la delegación y que delimiten sus facultades, para evitar que las actuaciones de los entes administrativos resulten arbitrarias o caprichosas." Domínguez Castro, supra. "Dichos criterios no tienen que ser expresos, pueden surgir, inclusive, del historial legislativo y pueden ser amplios y generales; si tiene un fin o interés público, por lo general es suficiente justificación para que se sostenga la delegación." Id.

Sobre esa necesidad de delegar, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha expresado:

[E]l mundo moderno se caracteriza por la gran complejidad en las relaciones sociales y económicas de las personas, conjuntamente con la progresiva supervisión gubernativa sobre la conducta individual, y ello implica que la legislatura está imposibilitada de anticipar legislativamente, en forma detallada, minuciosa o específica, la multiplicidad de situaciones que puedan surgir de esas relaciones complejas, siendo suficiente en que la ley en cuestión señale o establezca normas amplias y generales que sirvan de guía o dirección a entidades administrativas expertas, para que éstas, con sus experiencia y conocimientos especiales, apliquen esas normas concretamente a los hechos que puedan surgir y ulimen los detalles que implementen la política general legislativa.

Id.

Es preciso destacar también que en el campo administrativo se presume la validez constitucional de la delegación de poderes siempre que se provean guías adecuadas y suficientes que limiten el uso del poder delegado. Véase Luce & Co. v. Junta de Salarios Mínimo Hilton Hotels International Inc., 62 D.P.R. 452 (1944); López Salas v. Junta de Planificación, 40 D.P.R. 646 (1958), Marketing and Brokerage Specialists, Inc. v. Departamento de Agricultura, 118 D.P.R. 319 (1987).

En cuanto a la amplia facultad de la Asamblea Legislativa para delegar sus poderes, precisa destacar que se ha validado la delegación del poder de imponer contribuciones de la Legislatura a los municipios y al Tribunal Supremo. Lo anterior, a pesar de que el Artículo VI, Sección 2 de la Constitución de Puerto Rico establece en su primera oración que "[e]l poder del Estado Libre Asociado para imponer y cobrar contribuciones y autorizar su imposición y cobro por los

municipios se ejercerá según se disponga por la Asamblea Legislativa, y nunca será rendido o suspendido.” Como puede notarse, de esta disposición se desprende textualmente que la Legislatura es quien tiene el poder constitucional de autorizar la imposición y cobro de contribuciones. Sin embargo, se ha reconocido válidamente que dicho poder puede serle delegado a los municipios. Cía Turismo de Puerto Rico v. Mun. de Vieques, 179 D.P.R. 578, 584 (2010) (“Como es sabido, la Constitución de Puerto Rico confiere a la Asamblea Legislativa la facultad primordial de imponer contribuciones... Esta facultad del Estado para imponer contribuciones puede ser delegada a los municipios mediante un mandato claro y expreso, pues estos no tienen un poder inherente e independiente para imponerlas.”). Véase, además, HBA Contractors v. Mun. de Ceiba, 166 D.P.R. 443, 453 (2005); Café Rico, Inc. v. Mun. de Mayagüez, 155 D.P.R. 548, 552 (2001).

También se ha reconocido la validez de la delegación de este poder al Tribunal Supremo para imponer aranceles. La Ley 47-2009 enmendó el Código de Enjuiciamiento Civil y la Ley Núm. 17 de 11 de marzo de 1915, según enmendada, para establecer un nuevo sistema de pago de aranceles. En su Artículo 3 estableció la facultad del Tribunal Supremo de disponer, mediante resolución, los derechos arancelarios que habrán de pagarse. De hecho, dicho artículo ratifica que el poder para imponer contribuciones es de la Asamblea Legislativa al disponer lo siguiente:

A tenor con el Artículo VI Sección 2 de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, y por ser el poder de imponer contribuciones uno de jurisdicción exclusiva de la Asamblea Legislativa, cualquier Resolución por parte del Tribunal Supremo que resulte en la modificación de los derechos pagados por los ciudadanos para tramitar acciones civiles, será remitida ante las Secretarías de ambos Cuerpos Legislativos para su aprobación. Las modificaciones propuestas serán consideradas al comienzo de la próxima sesión ordinaria y regirán sesenta (60) días después de la terminación de dicha sesión, salvo desaprobación por la Asamblea Legislativa, la cual tendrá facultad, tanto en dicha sesión como posteriormente, para enmendar, derogar o complementar cualquiera de dichos derechos mediante ley específica a tal efecto.

Artículo 3 de la Ley 47-2009. (Énfasis suplido).

A tenor con el mandato expuesto en dicha Ley, el Tribunal Supremo adoptó la Resolución ER-2015-1. Véase In re Aprobación de los Derechos Arancelarios pagaderos a los(as) Secretarios(as), Alguaciles (as) y a otro personal de la Rama Judicial que ejerce funciones de recaudación, 192 D.P.R. 397 (2015). En el primer párrafo de dicha resolución nuestro máximo foro judicial expuso:

De conformidad con la facultad que nos confiere la Ley Núm. 47 de 30 de julio de 2009, según enmendada, para disponer los derechos correspondientes a la tramitación de acciones civiles en el Tribunal General de Justicia y otros servicios que se prestan en la Rama Judicial, y luego de evaluar las recomendaciones del Informe rendido por el Comité Técnico creado por la Ley Núm. 47-2009, *supra*, se adoptan los siguientes derechos arancelarios...

Id. (Énfasis suplido). Además, el Tribunal Supremo reconoció la facultad constitucional delegada por la Asamblea Legislativa de imponer contribuciones por medio de aranceles al expresar lo que sigue: “[s]e ordena a la Secretaria del Tribunal que, conforme a lo dispuesto en el

Artículo 3 de la Ley Núm. 47 de 30 de julio de 2009, según enmendada, remita esta Resolución a las Secretarías de los Cuerpos Legislativos para el trámite correspondiente.” *Id.*, pág. 400.

Tomando como base la normativa expuesta y regente a nivel federal y local, es permisible que la Legislatura de Puerto Rico le delegue parte de sus poderes a la Rama Ejecutiva. La delegación al ejecutivo, en cambio, deberá ser con guías amplias mediante principios inteligibles que guíen la discreción del Gobernador de manera adecuada.

Asimismo, de lo anterior surge que existen precedentes claros en Puerto Rico donde la Asamblea Legislativa ha delegado parte de sus poderes constitucionales a los municipios y a la Rama Judicial. Es decir, no sería la primera vez que la Legislatura delegaría alguno de sus poderes constitucionales.

Tomando en consideración los lineamientos jurídicos esbozados, en esta Ley delegamos los poderes de reorganizar al Gobernador, con el asesoramiento de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF). Ciertamente, AAFAF es la corporación pública que funge como agencia fiscal del Gobierno que está encargada de ejecutar el Plan Fiscal, reducir los gastos y maximizar los ahorros.

Esta delegación de poderes legislativos a AAFAF cumple con el principio y el propósito jurisprudencial: delegar a entidades administrativas expertas para que éstas con su experiencia y conocimientos especiales apliquen las normas generales para implementar la política pública legislativa.

Huracanes Irma y María: Reconstruyendo a Puerto Rico

Durante el mes de septiembre de 2017, Puerto Rico recibió dos poderosos huracanes que devastaron todos nuestros municipios. El 6 de septiembre, recibimos al huracán Irma, un huracán categoría que llegó a tener vientos sostenidos de sobre 185 millas por hora. Afortunadamente, este huracán dio un giro hacia el norte antes de pasar por Puerto Rico. No obstante, la isla de Vieques y gran parte del noreste de la isla se vio inmensamente afectado por fuerzas huracanadas. Tras ese huracán, sobre un millón de residentes de Puerto Rico estuvieron sin servicio de energía eléctrica. Se trabajó incansablemente para restituir el servicio eléctrico hasta llegar a un 96%. No obstante, mientras terminábamos de lidiar con los estragos de Irma, el 20 de septiembre Puerto Rico completo fue azotado por el huracán María, un poderoso huracán categoría 4 que arrojó a Puerto Rico de este a oeste. La magnitud de los daños ocasionados por dicho huracán no tienen paralelo en nuestra historia moderna. Tras su paso, el 100% del servicio eléctrico, de agua potable y de telecomunicaciones se vio severamente afectado como la historia moderna no había visto. Consigo, miles de casas y hogares sufrieron daños severos y en algunos casos irreparables. A partir de este momento, Puerto Rico enfrenta múltiples retos incluyendo de salud, infraestructura, servicios esenciales, alimentos y agua, económicos, sociales, entre otros.

A las pocas horas de este evento sin precedente, el Gobierno local atendió emergencias como la ocurrida en Toa Baja para rescatar a miles de personas que se encontraban en los techos de sus residencias tras el paso del huracán.

Han sido tiempos difíciles, pero cada día que pasa es mejor que el anterior y el Gobierno no descansará hasta que nos levantemos más fuertes que nunca. Para ello, necesitamos

reestructurar nuestro aparato gubernamental y hacerlo flexible. Hemos trabajado como pueblo, sin importar colores políticos, para reconstruir a Puerto Rico.

Aunque no en las circunstancias idóneas, Puerto Rico se encuentra en la palestra pública nacional y mundial. A pesar de los contratiempos y dificultades, Puerto Rico se levantará y le demostrará a nuestra nación y al mundo que somos fuertes. Por eso, ahora más que nunca, necesitamos un esquema legal que permita al Ejecutivo hacer los cambios necesarios para tener un Gobierno efectivo y ágil.

El camino a la recuperación continúa: Puerto Rico se Levanta

Ante nuestra nueva situación, nos hemos visto forzados a repensar y rediseñar el Gobierno de Puerto Rico. Según informes preliminares, los daños que sufrió Puerto Rico, incluyendo su infraestructura, podrían sobrepasar los \$100 mil millones. Como hemos mencionado en innumerables ocasiones en esta Ley, la situación económica de Puerto Rico se encontraba en su momento más frágil de los últimos tiempos. El recibir daños a nuestra infraestructura y economía de esta magnitud, nos ha colocado en un estado de emergencia. El funcionamiento limitado del gobierno y la situación económica de los puertorriqueños ha mermado sustancialmente los recaudos, al punto de que el Gobierno está en peligro de dejar de funcionar, sin la asistencia federal y sin tomar medidas bajo el poder de razón, como la aprobación de esta Ley la cual busca atender adecuadamente la emergencia por la cual atraviesa la Isla. Esta acción legislativa es necesaria para salvaguardar la salud, el bienestar y la seguridad del Pueblo de Puerto Rico durante la actual crisis humanitaria y fiscal.

Es este el momento de reconstruir el Gobierno de manera que sea ágil y eficiente para la ciudadanía. Un gobierno menos burocrático que en momentos de emergencia pueda ejecutar y mantener el gobierno a flote. En un momento donde todos los sectores se encuentran golpeados, nuestra prioridad debe ser el Pueblo. Será nuestro compromiso aprovechar esta emergencia al máximo para mejorar el funcionamiento efectivo del Gobierno y reducir sus gastos operacionales.

Aunque son muchos los obstáculos que debemos superar en el camino hacia la recuperación definitiva, hay esperanza y optimismo en nuestra gente. Hay un nuevo amanecer en nuestra patria y no podemos defraudar a Puerto Rico. Debemos enfrentar la crisis como un gran reto, que podemos traducir en grandes oportunidades. No podemos aferrarnos a los modelos fracasados del pasado. Tenemos que aprovechar este momento para enfrentar los retos, y procurar los grandes cambios que Puerto Rico necesita.

Con esta Ley, continuamos cumpliendo con las disposiciones del Plan Fiscal y continuamos enfrentando con gallardía los retos para hacer de este Gobierno uno más eficiente y ágil. De esta forma, cumplimos con nuestro compromiso de Plan para Puerto Rico y con el Plan Fiscal Certificado. Sólo mediante este cumplimiento podremos lograr la recuperación económica que necesitamos para cumplir con nuestra gente.

Ahora damos inicio a un proceso para transformar el Gobierno en uno más eficiente, rehabilitando sus finanzas y recobrando la confianza y la credibilidad perdida. Nos encaminamos a tener un Nuevo Gobierno que elimine los gastos perdidosos, sea más ágil, y que te pueda rendir cuentas. Un Nuevo Gobierno que deje atrás las estrategias y ataduras del pasado para transformarse

de cara a un futuro de prosperidad donde cada dólar de contribución se vea en acción y servicios al Pueblo.

Ahora nos levantamos con más fuerza que nunca, para vivir en una sociedad donde las oportunidades estén accesibles para cada hijo de esta tierra y donde todos estemos orgullosos de haber cumplido con nuestra patria.

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

1

CAPÍTULO 1.- DISPOSICIONES INICIALES

2

Artículo 1.01.- Título.

3

Por la presente se adopta la “Ley del Nuevo Gobierno de Puerto Rico.”

4

Artículo 1.02.-Declaración de Política Pública.

5 Esta Ley, recoge la organización y funcionamiento de la Rama Ejecutiva del Gobierno de
6 Puerto Rico. Al así adoptarla, declaramos como política pública un gobierno que persiga bajar
7 significativamente el gasto público, que sea ágil, eficiente y menos burocrático, y que mejore
8 sustancialmente la prestación de servicios al Pueblo. Para lograr esto, se requiere la evaluación
9 concienzuda de los servicios que provee el gobierno, a fin de determinar cuáles pueden ser
10 consolidados, delegados a otros sectores o eliminados porque ya no son necesarios. Todo ello, sin
11 que conlleve despidos de empleados públicos, sino la movilización de los mismos acorde con la
12 necesidad de servicios de nuestros ciudadanos.

13 De igual forma, declaramos como política pública permitir que se externalicen aquellos
14 servicios que puedan ser provistos con mayor eficiencia por entidades sin fines de lucro,
15 municipios u otras entidades.

16

Artículo 1.03.- Delegación de poderes.

1 Esta Asamblea Legislativa reafirma que el Gobernador es el primer ejecutivo de la Rama
2 Ejecutiva, y que como tal, él mismo debe tener los poderes necesarios para poder llevar a cabo sus
3 funciones y cumplir con los compromisos de reducir gastos y promover un mejor y más ágil
4 gobierno.

5 Esta Asamblea Legislativa es celosa de las facultades constitucionales esbozadas en el
6 Artículo III, Sección 16 de la Constitución de Puerto Rico, el cual indica que la Asamblea
7 Legislativa tendrá facultad para crear, consolidar o reorganizar departamentos ejecutivos y definir
8 sus funciones. No obstante, el Plan Fiscal certificado conforme a las disposiciones de la
9 denominada *Puerto Rico Oversight, Management, and Economic Stability Act*, conocida como
10 (“PROMESA” por sus siglas en inglés), Pub. L. 114-187, y el actual estatus de emergencia,
11 suponen una reestructuración gubernamental que permita ahorros presupuestarios y eficiencia en
12 un proceso ágil y flexible para responder a nuestros retos actuales y futuros.

13 A tales fines, entendemos prudente delegar facultades al gobernador con limitaciones para
14 poder cumplir con las disposiciones de PROMESA. Dada la urgencia de cumplir con dicho plan y
15 atender la presente emergencia, esta Asamblea Legislativa entiende que tal propósito puede ser
16 logrado más efectivamente desde la Rama Ejecutiva conforme a la presente Ley.

17 En miras de que el funcionamiento del Gobierno sea el más eficiente posible, se autoriza
18 al Gobernador a crear, suprimir, externalizar, agrupar, coordinar y consolidar agencias, funciones,
19 servicios, programas y facultades de las agencias. Así mismo, se faculta al Gobernador a tomar
20 toda medida necesaria y conveniente para adelantar la política pública antes esbozada y a atender
21 con liberalidad la emergencia actual en beneficio del Pueblo.

22 Mediante esta Ley, y conforme a los principios inteligibles esbozados en la misma,
23 autorizamos al Gobernador a crear, consolidar, reestructurar, reorganizar y hasta suprimir agencias

1 del ejecutivo, reconociendo sus poderes como jefe de la Rama Ejecutiva. No obstante, esta
2 Asamblea Legislativa, conforme a su facultad constitucional, fiscalizará de cerca cualquier
3 reorganización gubernamental, para así dar cumplimiento al mandato constitucional antes
4 mencionado.

5 Esta delegación tendrá vigencia de diez (10) años mientras dura el Plan Fiscal certificado
6 para el Gobierno central y las disposiciones de PROMESA. Luego de transcurrido ese término, el
7 gobernador dejará de tener los poderes bajo la Ley pero sus cambios seguirán vigentes salvo que
8 la legislatura presente legislación en contrario.

9 **Artículo 1.04.- Principios Inteligibles**

10 Sin excluir el cumplimiento con los demás requerimientos, normas y principios
11 establecidos a través de esta Ley, la delegación de poderes establecida en esta Ley se concede
12 sujeto al cumplimiento de los Principios Inteligibles enumerados a continuación:

- 13 1) Se promueva la mejor ejecución de las leyes y la más eficaz administración pública;
- 14 2) Se reduzca, visto el Gobierno como un todo, el gasto público mientras se crea un
15 gobierno más ágil, eficiente y manteniendo la prestación de servicios públicos a los
16 sectores que las leyes vigentes protegen;
- 17 3) Se reduzca el número de agencias creando, suprimiendo, reorganizando, consolidando
18 o externalizando sus programas y servicios;
- 19 4) Se elimine la duplicidad y/o redundancia de entidades, servicios y programas;
- 20 5) Se garantice la continuidad en el acceso a los fondos federales;
- 21 6) Se cumpla con el Plan Fiscal certificado conforme a PROMESA;
- 22 7) No se elimine ninguna de las agencias gubernamentales enumeradas en la Constitución
23 de Puerto Rico.

1 8) Se protejan los derechos de los empleados regulares de conformidad con el
2 ordenamiento jurídico vigente y conforme a la Ley 8-2017, según enmendada.

3 **CAPÍTULO 2.- RAMA EJECUTIVA DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO.**

4 **Artículo 2.01.-Sede**

5 La sede del Gobierno de Puerto Rico será la ciudad de San Juan, conforme a las
6 disposiciones del Artículo I, Sección 4 de la Constitución de Puerto Rico.

7 **Artículo 2.02. – Gobernador de Puerto Rico**

8 El jefe de la Rama Ejecutiva del Gobierno de Puerto Rico recaerá en la figura del
9 Gobernador. Éste será elegido por voto directo cada cuatro (4) años y ejercerá su cargo por el
10 término de cuatro (4) años, conforme al ordenamiento jurídico legal y constitucional aplicable.
11 Tendrá que haber cumplido treinta y cinco (35) años de edad y, durante los cinco (5) años previos
12 a su elección, haber sido ciudadano de los Estados Unidos y residente en Puerto Rico.

13 **Artículo 2.03. – Gobernador de Puerto Rico- Funciones y deberes**

14 El Gobernador tendrá aquellos deberes, funciones y atribuciones establecidos en la
15 Constitución de Puerto Rico, el Código Político, la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Puerto
16 Rico, en esta Ley y en aquellas leyes aprobadas y promulgadas por la Asamblea Legislativa. Como
17 jefe de la Rama Ejecutiva su poder será amplio, siempre y cuando no vaya en contravención con
18 el ordenamiento jurídico existente.

19 También tendrá por delegación legislativa con la asesoría de Autoridad de Asesoría
20 Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico, en adelante AAFAF, la facultad de reorganizar,

1 consolidar, crear, suprimir y externalizar cualquier agencia, según definida y limitada en el
2 Artículo 2.06 de esta Ley, así como cualquier programa, servicio o asunto administrativo. A estos
3 efectos, dicha facultad se promulgará por orden ejecutiva pública. El gobernador tendrá la
4 autoridad para nombrar funcionarios del ejecutivo y su remuneración conforme a esta Ley.

5 **Artículo 2.04. – Gobernador de Puerto Rico- Orden de Sucesión.**

6 En caso de que ocurra una vacante en el cargo de Gobernador producida por muerte,
7 renuncia, destitución, incapacidad total y permanente, o por cualquier otra falta absoluta, dicho
8 cargo pasará al Secretario de Estado, quien lo desempeñará por el resto del término y hasta que un
9 nuevo Gobernador sea electo y tome posesión. Si quedasen vacantes simultáneamente los cargos
10 de Gobernador y Secretario de Estado, el orden de sucesión será el siguiente:

- 11 1) Secretario de Justicia
- 12 2) Secretario de Hacienda
- 13 3) Secretario de Educación
- 14 4) Secretario del Trabajo y Recursos Humanos
- 15 5) Secretario de Obras Públicas
- 16 6) Secretario de Desarrollo Económico, Innovación y Comercio
- 17 7) Secretario de Salud
- 18 8) Secretario de Agricultura

19 Para advenir al ejercicio permanente del cargo de Gobernador, un Secretario o Secretaria
20 debe ocupar su puesto en propiedad, habiendo sido ratificado su nombramiento; excepto en el caso
21 del Secretario(a) de Estado, salvo lo dispuesto en el Artículo IV Sección 9 de la Constitución de
22 Puerto Rico. Deberá además cumplir los requisitos de edad, ciudadanía y residencia dispuestos

1 para el Gobernador por el Artículo IV de la Constitución, en cuyo defecto la sucesión
2 corresponderá al siguiente en el orden que así los cumpla. Solamente en el caso que ningún
3 secretario cumpliera con los requisitos constitucionales y/o con el requisito de haber sido ratificado
4 su nombramiento, se activará este orden de sucesión obviando los requisitos dispuestos en este
5 Artículo excepto cuando aplique el Artículo IV Sección 9 de la Constitución de Puerto Rico.

6 Hasta tanto el nuevo Gobernador hubiere nombrado y haya sido ratificado en su puesto un
7 nuevo Secretario de Estado, habrá de velar por que el orden de sucesión no quede vacante.

8 Si la ausencia es transitoria, se seguirá el mismo orden de sucesión establecido en este
9 Artículo. No obstante, para el ejercicio interino de las funciones de Gobernador, no será obligatorio
10 haber cumplido las disposiciones constitucionales sobre edad y residencia, ni con el requisito de
11 que el Secretario llamado a suceder haya sido ratificado.

12 **Artículo 2.05.-Rama Ejecutiva.- Gabinete**

13 Para el ejercicio de su poder, el Gobernador estará asistido de secretarios de Gobierno y
14 jefes de agencias, dependencias e instrumentalidades de la Rama Ejecutiva. Cada uno de éstos
15 será nombrado de la forma y manera que reza la Constitución, esta Ley, su ley orgánica u la orden
16 ejecutiva promulgada de conformidad con esta ley. De igual forma, aplicará a su cargo las normas
17 generales establecidas en el Código Político de Puerto Rico. Los secretarios y jefes de agencia
18 tendrán amplia discreción administrativa en el desempeño de sus funciones.

19 **Artículo 2.06.- Agencia- Definición**

1 Para fines de esta Ley, la palabra agencia significará cualquier departamento, oficina,
2 negociado, comisión, junta, administración, autoridad, corporación pública, o cualquier otro
3 organismo de la Rama Ejecutiva.

4 Las agencias tendrán aquellas funciones enumeradas en su ley orgánica, en esta Ley y
5 aquellas asignadas o delegadas por el Gobernador de Puerto Rico por una orden ejecutiva
6 promulgada de conformidad con las disposiciones de esta Ley.

7 Conforme a la política pública de esta Ley, cualquier agencia, con excepción de las
8 agencias constitucionales y aquellas expresamente excluidas, podrán ser reorganizadas bajo las
9 disposiciones de la misma. Disponiéndose que las agencias constitucionales podrán ser
10 reorganizadas y algunos de sus servicios podrán ser externalizados, pero no podrán ser suprimidas.

11 Por las funciones que llevan a cabo, también se eximen de las disposiciones de esta Ley a
12 las siguientes agencias de la Rama Ejecutiva:

- 13 a) Oficina del Panel Sobre el Fiscal Especial Independiente
- 14 b) Oficina de Ética Gubernamental
- 15 c) Comisión Estatal de Elecciones
- 16 d) Oficina del Contralor Electoral
- 17 e) Universidad de Puerto Rico

18 Cualquier cambio a estas agencias, se hará por la vía legislativa ordinaria.

19 De igual modo, la aplicación a aquellas agencias que son corporaciones públicas y que
20 tengan un Plan Fiscal aprobado y certificado conforme a las disposiciones de PROMESA, será

1 limitada mientras esté en vigor PROMESA. La aplicación de esta Ley a cualquier de estas
2 corporaciones no podrá ser en contravención de su Plan Fiscal vigente o enmendado.

3 **Artículo 2.07.- Aplicabilidad Supletoria de las leyes orgánicas.- Agencias que no se**
4 **encuentran incluidas en esta Ley.**

5 Aquellas agencias que existan al momento de aprobación de esta Ley que no se enumeren
6 expresamente en el Artículo 2.08, seguirán existiendo hasta tanto y en cuanto una orden ejecutiva
7 promulgada de conformidad con esta Ley no exprese lo contrario. A tales fines, dichas agencias
8 continuarán rigiéndose supletoriamente por la ley orgánica bajo la cual fueron creadas sin perjuicio
9 de que sus oficinas, servicios, programas puedan ser modificados, suprimidos, transferidos,
10 consolidados o externalizados de conformidad a esta Ley.

11 **Artículo 2.08.- Agencias de la Rama Ejecutiva**

12 La Rama Ejecutiva del Gobierno de Puerto Rico estará compuesta, conforme a la
13 Constitución de Puerto Rico, de las siguientes agencias:

- 14 1) Departamento de Estado
- 15 2) Departamento de Justicia
- 16 3) Departamento de Hacienda
- 17 4) Departamento de Educación
- 18 5) Departamento del Trabajo y Recursos Humanos
- 19 6) Departamento de Obras Públicas
- 20 7) Departamento de Desarrollo Económico y Comercio
- 21 8) Departamento de Salud

- 1 9) Departamento de Agricultura
- 2 10) Cualquier otra agencia que se cree mediante ley u orden ejecutiva promulgada de
- 3 conformidad con esta Ley.

4 **Artículo 2.09.-Jefes de Agencias**

5 Las agencias, serán dirigidas por un Secretario, Jefe, Administrador, Comisionado,

6 Director Ejecutivo, Presidente, o cualquier otro título o cuerpo rector definido por ley u orden

7 ejecutiva promulgada de conformidad con esta Ley. Éstos serán la autoridad nominadora y serán

8 el administrador y jefe de cada agencia.

9 **Artículo 2.10.-Deberes y Facultades de los Jefes de Agencia**

10 Los Directores de Agencia tendrán aquellos deberes y facultades enumerados en ley o por

11 orden ejecutiva promulgada de conformidad con esta Ley. De manera general, los directores de

12 agencia tendrán, sin limitarse a, los siguientes deberes y facultades:

- 13 (a) Tendrá a su cargo la autoridad jerárquica, administración y supervisión inmediata
- 14 de la agencia.
- 15 (b) Establecer, organizar, dirigir y supervisar la estructura administrativa y
- 16 componentes operacionales de la agencia.
- 17 (c) Preparar y presentar el plan de trabajo y el presupuesto anual de su agencia, en
- 18 concordancia con el ordenamiento jurídico vigente.
- 19 (d) Establecer el orden de sucesión en caso de su ausencia, incapacidad o muerte.
- 20 (e) Autorizar y supervisar cualquier contrato que sea necesario para el funcionamiento
- 21 de su agencia.

- 1 (f) Establecer los niveles de funcionamiento de las operaciones de la agencia,
2 incluyendo la facultad para reclutar y contratar a cualquiera de los funcionarios y
3 empleados bajo su supervisión sujeto a las disposiciones de la Ley 8-2017, según
4 enmendada, conocida como “Ley para la Administración y Transformación de los
5 Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico”.
- 6 (g) Dirigir la preparación de los planes de la agencia, tanto a corto como a largo plazo,
7 en cuanto a contratación y desarrollo de personal, operaciones, controles
8 administrativos, estrategias de mercados y todas las otras funciones necesarias para
9 asegurar el éxito de la agencia en el cumplimiento efectivo y eficiente de sus
10 responsabilidades.
- 11 (h) Nombrar y contratar los servicios de todos sus empleados, funcionarios y agentes,
12 y conferirles poderes, facultades, responsabilidades y la autoridad que estime
13 propia, sujeto a las disposiciones de la Ley Núm. 8-2017, según enmendada,
14 conocida como “Ley para la Administración y Transformación de los Recursos
15 Humanos en el Gobierno de Puerto Rico” u otra legislación aplicable, salvo su ley
16 orgánica excluya la aplicación de cualquier ley.
- 17 (i) Será el enlace directo entre el Gobernador y la agencia.
- 18 (j) Colaborar y asesorar al Gobernador y a la Asamblea Legislativa en la formulación
19 de la política pública de su agencia.
- 20 (k) Implementará la política pública establecida por el Gobernador con respecto a la
21 jurisdicción de la agencia, así como propondrá al Gobernador acciones, programas
22 y estrategias para el desarrollo de estas políticas.
- 23 (l) Manejará y supervisará los servicios gerenciales de la agencia.

- 1 (m) Aplicará las leyes y promulgará las normas, reglamentos, memorandos de
2 entendimiento y directrices relevantes a los servicios y funciones de la agencia.
- 3 (n) Contratar servicios profesionales y arrendar o adquirir propiedad inmueble, de ser
4 necesario, así como hacer acuerdos y/o contratos con otras entidades.
- 5 (o) Adoptará las reglas y los reglamentos que sean necesarios para establecer los
6 requisitos de ingreso, obligaciones, responsabilidad y conducta del personal de la
7 agencia, así como cualquier otro reglamento interno que sea necesario para
8 garantizar el funcionamiento de la agencia.
- 9 (p) Adoptar su propio sello.
- 10 (q) Imponer multas por infracciones a sus reglamentos y cobrar derechos cuando se le
11 autorice por Ley o por orden ejecutiva promulgada de conformidad con esta Ley.
- 12 (r) Podrá ejercer todo poder necesario para el buen funcionamiento de su agencia que
13 no esté en conflicto con esta o alguna otra ley.

14 Aquellas Agencias que cuenten con una Junta de Directores, Junta de Gobierno, Junta
15 Rectora, o cualquier otro organismo de gobernanza análogo, cualquiera de los deberes y facultades
16 antes descritos que por su Ley orgánica o ley especial le correspondan a dicho cuerpo se
17 continuarán ejerciendo de conformidad, hasta tanto y en cuanto una Orden Ejecutiva promulgada
18 conforme a esta Ley disponga lo contrario.

19 **Artículo 2.11.- Facultad del Gobernador de crear, suprimir, consolidar y reorganizar**
20 **agencias de la Rama Ejecutiva**

21 Se faculta al gobernador a examinar y evaluar la organización de todas las agencias de la
22 Rama Ejecutiva y sus programas de conformidad con la delegación legislativa expresa contenida
23 en esta Ley y con los principios inteligibles enumerados en el Artículo 1.04 de esta Ley.

1 Se faculta al Gobernador para tomar toda medida que sea necesaria y conveniente, para
2 que, mediante Orden Ejecutiva, reduzca los gastos y promueva la economía de la Rama Ejecutiva
3 hasta el máximo compatible con el funcionamiento eficiente del gobierno, el interés público y con
4 el Plan Fiscal certificado conforme a PROMESA. De igual forma, se faculta al Gobernador a
5 mantener la eficiencia de las operaciones de la Rama Ejecutiva; y agrupar, coordinar, consolidar,
6 externalizar, reorganizar, suprimir y/o crear todas aquellas agencias, funciones, programas y
7 servicios que entienda necesario.

8 Las agencias creadas por esta Asamblea Legislativa, con excepción de aquellas
9 enumeradas en el Artículo 2.06 de esta Ley podrán ser suprimidas, consolidadas, externalizadas
10 y/o reorganizadas conforme a la política pública establecida en esta Ley. A tales efectos, se le
11 delega al gobernador de Puerto Rico la facultad de emitir aquellas órdenes ejecutivas necesarias
12 para lograr el más eficaz funcionamiento de la Rama Ejecutiva. Dichas órdenes ejecutivas
13 cumplirán con las disposiciones del Artículo 1.04 de estas Ley. En dichas órdenes ejecutivas, el
14 Gobernador establecerá el andamiaje administrativo que deberán tener las agencias afectadas.

15 Dichas órdenes ejecutivas dispondrán las recomendaciones pertinentes para:

- 16 a) La transferencia de toda o cualquier parte de una agencia o de todas o cualesquiera
17 funciones y programas de la misma, a otra agencia;
- 18 b) La consolidación de toda o cualquier parte o función de alguna agencia con otra
19 agencia;
- 20 c) La revisión de funciones o procesos para agilizar la prestación de servicios;
- 21 d) La creación o eliminación de una agencia o función;
- 22 e) La delegación o transferencia de funciones o competencias de agencias a los
23 municipios de Puerto Rico o sus consorcios, al tercer sector u otra entidad;

- 1 f) La delegación de mayores poderes a los niveles locales y regionales de las agencias
2 para acercar la toma de decisiones a los ciudadanos;
- 3 g) El establecimiento de parámetros y guías operacionales para propiciar el
4 funcionamiento eficiente de las agencias objeto de la orden ejecutiva;
- 5 h) Cambiar el nombre de cualquier agencia afectada por una reorganización y el título de
6 su jefe o su cuerpo rector, así como designar el nombre de la nueva agencia y el título
7 de su jefe y la composición del ente rector;
- 8 i) Nombrar, remover, establecer términos y retribución del jefe y/o funcionarios de
9 cualquier agencia, así como su composición, incluyendo la agencia que resulte de una
10 consolidación, reorganización o aquellas de nueva creación;
- 11 j) Transferir y disponer de libros de contabilidad, archivos, propiedad, obligaciones y
12 personal afectado. Disponiéndose, que la movilidad de los empleados de las agencias
13 afectadas se hará de conformidad con la Ley 8-2017, según enmendada;
- 14 k) Transferir aquellos balances de asignaciones y de otros fondos disponibles para usarse
15 en relación con cualquier función o agencia afectada por la reorganización, que se
16 considere necesario en virtud de la misma, para uso de la agencia o agencias que
17 asuman las funciones, conforme al ordenamiento jurídico vigente y disponer sobre el
18 destino del presupuesto sobrante, conforme a los procesos requeridos por PROMESA;
- 19 l) Detallar los ahorros y/o eficiencias proyectados con la implementación de la orden
20 ejecutiva; y;
- 21 m) Autorizar a las agencias a que promulguen reglamentos, establezcan procesos
22 adjudicativos, cartas circulares, órdenes administrativas, normativas, así como
23 cualquier otra delegación que entienda necesaria.

1 n) Cualquier otra función necesaria para la consecución de la política pública de esta Ley
2 y los poderes aquí delegados.

3 **Artículo 2.12.- Procedimiento por parte del Gobernador**

4 En su rol como jefe máximo de la Rama Ejecutiva, el gobernador evaluará el
5 funcionamiento de todas las agencias de la Rama Ejecutiva. Dentro de esta evaluación, el
6 gobernador identificará cuáles agencias, oficinas, unidades, servicios o programas deben ser
7 creados, transferidos, suprimidos, reorganizados, agrupados, consolidados o externalizados. Se
8 autoriza al gobernador a utilizar todos los recursos a su disposición para hacer el análisis
9 correspondiente. En el descargo de esta encomienda, el gobernador estará asesorado por la
10 AAFAF, por ser la entidad gubernamental con el *expertise* en la materia de reorganización
11 gubernamental, el Plan Fiscal y PROMESA.

12 Una vez el Gobernador identifique cuáles agencias, servicios o programas serán atendidos,
13 redactará una orden ejecutiva a tales efectos. Dicha orden será firmada por el Gobernador y por
14 el Secretario de Estado quien certificará que la orden fue promulgada conforme a la Ley y será
15 pública.

16 Una vez certificada la orden ejecutiva, el Secretario de Estado, o la persona que este
17 designe, en un término de cinco (5) días, presentará copia de la misma en las secretarías de ambas
18 cámaras de la Asamblea Legislativa para que conste en sus archivos y tenga pleno vigor.

19 **Artículo 2.13.- Facultad de reorganizar internamente a Jefes de Agencia**

20 Se autoriza a los jefes de Agencia para que, en coordinación con la AAFAF, puedan crear,
21 reorganizar, consolidar, modificar, abolir, suprimir o coordinar los diversos organismos,
22 corporaciones, administraciones, divisiones, dependencias negociados, servicios, oficinas,
23 programas, actividades y unidades adscritas a su agencia, siempre que no vayan en contravención

1 con esta Ley o con una orden ejecutiva conforme a la misma, siempre que tales cambios sean
2 necesarios para lograr cualquiera de los siguientes fines:

3 (1) promover la mejor ejecución de sus facultades y la más eficaz y expedita administración
4 de los asuntos de la Agencia;

5 (2) mejorar el servicio que se presta a la ciudadanía;

6 (3) aumentar la eficiencia de la Agencia;

7 (4) reducir los gastos hasta el máximo compatible con un eficiente funcionamiento; (5)
8 evitar duplicación total o parcial de esfuerzo o recursos; o

9 (6) atender una emergencia o desastre mayor.

10 **Artículo 2.14.- Facultad de nombramientos en cuanto a las agencias creadas,**
11 **suprimidas consolidadas o reorganizadas.**

12 Cuando, como parte de las gestiones para agrupar, coordinar, consolidar, reorganizar,
13 suprimir y crear agencias, funciones, programas o servicios, se altere la naturaleza de los cargos
14 directivos o su composición o cuerpo rector, de alguna agencia al punto de que el cargo sea
15 eliminado o resulte sustancialmente modificado, el gobernador podrá declarar el mismo como
16 eliminado y procederá a ejercer su poder de nombramiento de manera consistente con la nueva
17 estructura. El director máximo de cada entidad gubernamental deberá ser confirmado por el
18 Senado salvo ya haya sido confirmado para el mismo cargo o uno similar o requiera confirmación
19 por ambos cuerpos según la Constitución o legislación especial.

20 Esta facultad incluye aquellos funcionarios que realicen funciones cuasi-legislativas o
21 cuasi-judiciales, independientemente de que previamente se hubiesen impuesto restricciones al
22 gobernador para la destitución de dichos funcionarios, de disponerse en la orden ejecutiva
23 promulgada conforme a esa ley otro organismo directivo con parámetros que aseguren su

1 independencia y funciones cuasi judiciales o cuasi legislativas de dicho director o cuerpo rector de
2 nueva creación.

3 El gobernador no contará con la facultad aquí concedida en aquellos casos donde la
4 naturaleza del cargo no fue alterada porque los deberes y obligaciones se mantuvieron inalterados
5 a pesar de algún cambio de nombre en cuyo caso los nombramientos se regirán conforme a la Ley
6 orgánica de dicha agencia. No obstante, esto no aplicará cuando se modifican sus funciones.

7 Se entenderá que un puesto o cargo fue abolido cuando el mismo desaparezca en la nueva
8 estructura o cuando existe diferencia en la naturaleza o funciones de los cargos.

9 **Artículo 2.15.- Delegación de poderes cuasi-legislativos**

10 Se le delega a las Agencias reorganizadas, consolidadas, creadas, coordinadas, agrupadas,
11 reestructuradas conforme a esta Ley, los poderes cuasi-legislativos de reglamentación sujetos a los
12 principios inteligibles contenidos en las leyes orgánicas y leyes especiales que rigen actualmente
13 dichas Agencias. Tales principios se incluirán en las Órdenes Ejecutivas promulgadas por el
14 Gobernador conforme a esta Ley.

15 **Artículo 2.16.- Delegación de poderes cuasi-judiciales**

16 Se le delega a las Agencias reorganizadas, consolidadas, creadas, coordinadas, agrupadas,
17 reestructuradas conforme a esta Ley, los poderes cuasi-judiciales de adjudicación sujetos a los
18 principios inteligibles contenidos en las leyes orgánicas y leyes especiales que rigen actualmente
19 dichas Agencias. Tales principios se incluirán en las Órdenes Ejecutivas promulgadas por el
20 Gobernador conforme a esta Ley.

21 **CAPÍTULO III.- AGENCIAS CONSTITUCIONALES DE LA RAMA EJECUTIVA**

1 **Artículo 3.01.- Departamento de Estado**

2 El Departamento de Estado tendrá la responsabilidad de fomentar las relaciones
3 culturales, políticas económicas entre Puerto Rico y países extranjeros al igual que con otras
4 jurisdicciones de los Estados Unidos de América. Tendrá también, entre otras, las siguientes
5 facultades:

- 6 a) Promulgar, publicar, certificar y vender las leyes y reglamentos del Gobierno de
7 Puerto Rico;
- 8 b) Reglamentar el uso de la bandera y el escudo de Puerto Rico;
- 9 c) Expedir licencias para el ejercicio de profesiones u oficios reglamentados por el
10 Estado a través de sus Juntas Examinadoras;
- 11 d) Preparar y custodiar registros de cónsules, corporaciones y sociedades, marcas de
12 fábrica, notarios y propiedad intelectual, entre otros;
- 13 e) Tramitar la solicitud de pasaportes de los ciudadanos de los Estados Unidos, según
14 delegado por el Gobierno Federal;
- 15 f) Coordinar los asuntos de índole protocolar que competen al Gobierno;
- 16 g) Cualquier otra facultad, función, deber o poder establecido por la Constitución, Ley u
17 orden ejecutiva promulgada de conformidad con esta Ley.

18 **Artículo 3.02.- Departamento de Justicia**

19 El Departamento de Justicia será el representante legal del Gobierno de Puerto Rico, de sus
20 agencias y del Pueblo de Puerto Rico en las demandas y procesos civiles, criminales,
21 administrativos y especiales en que sea parte y que sean instados en los tribunales u otros foros en
22 o fuera de la jurisdicción de Puerto Rico. Tendrá también, entre otras, las siguientes facultades:

- 1 a) Entrar en transacciones o acuerdos a nombre del Gobierno de Puerto Rico o del
2 Pueblo de Puerto Rico;
- 3 b) Emitir opiniones legales y publicarlas;
- 4 c) Reglamentar la contratación de servicios legales;
- 5 d) Investigar, tomar juramento y citar testigos;
- 6 e) Conceder inmunidad a cualquier persona en el curso de una investigación o
7 procedimiento;
- 8 f) Investigar e informar al Gobernador las peticiones de indulto;
- 9 g) Promulgar e implantar la política pública de la Oficina de Compensación y Servicios
10 a las Víctimas de Delito;
- 11 h) Cualquier otra facultad, función, deber o poder establecido por la Constitución, Ley u
12 orden ejecutiva promulgada de conformidad con esta Ley.

13 **Artículo 3.03.- Departamento de Hacienda**

14 El Departamento de Hacienda, además de las funciones y responsabilidades que le
15 encomiendan las leyes existentes relacionadas con los sistemas de administración fiscal y
16 contributivo, será la agencia de la Rama Ejecutiva encargada de implantar, desarrollar, supervisar
17 y coordinar la política pública, los organismos y programas dirigidos a los juegos de azar y las
18 instituciones financieras. Tendrá también toda otra facultad, función, deber o poder establecido
19 por la Constitución, Ley u orden ejecutiva promulgada de conformidad con esta Ley.

20 **Artículo 3.04.- Departamento de Educación**

21 El Departamento de Educación promoverá la gestión educativa del Sistema de Educación
22 Pública a través de normas reglamentarias, de directrices de política pública y de actividades de

1 planificación, auditoría, fiscalización y evaluación de los procesos académicos y administrativos
2 de las escuelas. También tendrá, entre otras, las siguientes facultades:

- 3 a) Planificación de las instalaciones escolares;
- 4 b) Apertura y cierre temporal o permanente de instalaciones escolares;
- 5 c) Estructuración del Sistema por grados y niveles;
- 6 d) La planificación fiscal del sistema y la asignación presupuestaria de cada escuela;
- 7 e) Desarrollar pruebas de aprovechamiento académico confiables que permitan ponderar
8 el desempeño del sistema educativo y de las escuelas;
- 9 f) Auditoría fiscal y el examen de los procedimientos de personal de las escuelas;
- 10 g) Evaluación del desempeño de los directores de escuelas;
- 11 h) Evaluación, auditoría o fiscalización de cualquier otra actividad que las escuelas
12 desarrollen dentro de la autonomía concedida por ley;
- 13 i) Cualquier otra facultad, función, deber o poder establecido por la Constitución, Ley u
14 orden ejecutiva promulgada de conformidad con esta Ley.

15 **Artículo 3.05.- Departamento del Trabajo y Recursos Humanos**

16 El Departamento del Trabajo y Recursos Humanos tendrá las funciones y
17 responsabilidades de carácter general establecidas por ley, así como las que le encomiendan las
18 leyes protectoras del trabajo y otras leyes laborales. También tendrá, entre otras, las siguientes
19 facultades:

- 20 a) Patrocinar, alentar y desarrollar los intereses y el bienestar de los trabajadores
21 de Puerto Rico, laborar por mejorar sus condiciones de vida y de trabajo y
22 promover sus oportunidades para obtener empleos lucrativos, de acuerdo con

- 1 el ordenamiento jurídico vigente;
- 2 b) Implantar, desarrollar y coordinar la política pública y los programas dirigidos
3 a la formación y capacitación de los recursos humanos indispensables para
4 cubrir las necesidades del sector del trabajo;
- 5 c) Representar en los foros correspondientes a los trabajadores, para garantizar sus
6 derechos bajo la legislación protectora del trabajo;
- 7 d) Garantizar condiciones de trabajo adecuadas, seguras, salubres y protegidas
8 contra riesgos;
- 9 e) Establecer un sistema de estadísticas;
- 10 f) Cualquier otra facultad, función, deber o poder establecido por la Constitución,
11 Ley u orden ejecutiva promulgada de conformidad con esta Ley.

12 **Artículo 3.06.- Departamento de Obras Públicas**

13 El Departamento de Obras Públicas será la agencia encargada de la planificación, la
14 promoción y la coordinación de la actividad gubernamental en el campo de la transportación.

15 Tendrá también, entre otras, las siguientes facultades:

- 16 a) implantar la política general sobre transportación terrestre, aérea y marítima del
17 Gobierno,
- 18 b) desarrollar programas y estrategias para ofrecer al Pueblo las mejores carreteras y
19 medios de transportación facilitando el movimiento de vehículos y personas;
- 20 c) establecer, administrar e implementar programas, proyectos, o cualesquiera otras
21 medidas para satisfacer las necesidades del Pueblo en cuanto a servicios y facilidades
22 de transportación;

- 1 d) planificar y fomentar el desarrollo de un sistema de transportación integrado, eficiente
- 2 y seguro que propicie el desarrollo de la economía, el bienestar general y la seguridad
- 3 en su disfrute;
- 4 e) administrar los programas gubernamentales de transportación;
- 5 f) evaluar y estudiar constantemente los problemas de transportación y la efectividad de
- 6 los programas y proyectos que se desarrollen para resolverlos;
- 7 g) Cualquier otra facultad, función, deber o poder establecido por la Constitución, Ley u
- 8 orden ejecutiva promulgada de conformidad con esta Ley.

9 **Artículo 3.07.- Departamento de Desarrollo Económico, Innovación y Comercio**

10 El Departamento de Desarrollo Económico, Innovación y Comercio tendrá a su cargo

11 promover el desarrollo económico de Puerto Rico a través del fomento de diversos segmentos de

12 la economía, tales como el turismo; la agricultura; la manufactura; el cine; los servicios; las ventas

13 al detal; las finanzas; la tecnología, la innovación, las industrias emergentes, entre otros. Tendrá

14 también, entre otras, las siguientes facultades:

- 15 a) Desarrollar, coordinar, implantar y supervisar la ejecución de la política pública sobre
- 16 el desarrollo económico de Puerto Rico;
- 17 b) Promover, bajo un enfoque integral, toda la actividad gubernamental relativa al
- 18 desarrollo de la economía, incluyendo, sin limitación, los sectores empresariales de la
- 19 industria, el comercio, el turismo, el cine, los servicios, asuntos energéticos, el
- 20 cooperativismo, la economía colaborativa (“sharing economy”), la innovación y
- 21 tecnología, entre otros.

- 1 c) Promover la igualdad de condiciones y apoyo a diversos grupos tales como las mujeres
2 empresarias, los jóvenes, las pequeñas y medianas empresas, así como los trabajadores
3 desplazados;
- 4 d) Servir de enlace entre los mercados locales e internacionales promoviendo el
5 intercambio comercial de bienes y servicios entre Puerto Rico, otras jurisdicciones de
6 los Estados Unidos y el resto del mundo;
- 7 e) Promover y mercadear productos y servicios de Puerto Rico en Estados Unidos y en el
8 exterior incluyendo ofrecer apoyo para identificar mercados potenciales para productos
9 y/o servicio de empresas locales;
- 10 f) Llevar a cabo estudios e investigaciones económicas, de mercados y de otra índole,
11 relacionados con la economía, tanto de Puerto Rico como del resto de los Estados
12 Unidos, así como otras jurisdicciones, con el propósito de identificar oportunidades,
13 anticipar situaciones problemáticas y trazar nuevas estrategias;
- 14 g) Promover toda acción encaminada a la mejor utilización, rehabilitación y/o
15 aprovechamiento de los terrenos para adelantar la política pública de desarrollo
16 industrial, comercial y de hogares;
- 17 h) Preparar y mantener todo tipo de estadística que contribuya al desarrollo económico de
18 Puerto Rico;
- 19 i) Procurar, mantener y supervisar todas aquellas herramientas que coloquen a Puerto
20 Rico como lugar de inversión, y/o que propendan a fomentar el valor añadido y la
21 exportación;

- 1 j) Coordinar, supervisar y administrar la promoción a nivel internacional de los
2 programas e incentivos para que individuos o entidades nacionales e internacionales
3 inviertan o establezcan sus operaciones en Puerto Rico;
- 4 k) Establecer, desarrollar, supervisar y/o fiscalizar las estrategias e iniciativas que puedan
5 desarrollarse para la promoción de Puerto Rico como un destino de turismo culinario,
6 deportivo y recreativo, cultural, médico, de naturaleza y aventura, de lujo, de
7 convenciones, de negocios, entre otros;
- 8 l) Cualquier otra facultad, función, deber o poder establecido por la Constitución, Ley u
9 orden ejecutiva promulgada de conformidad con esta Ley.

10 **Artículo 3.08.- Departamento de Salud**

11 El Departamento de Salud tendrá a su cargo proteger la salud pública. Tendrá también,
12 entre otras, las siguientes facultades:

- 13 a) Regular y fiscalizar la prestación de los servicios de salud en Puerto Rico;
- 14 b) Velar porque se cumplan las normas para garantizar el bienestar general del pueblo;
- 15 c) Prevenir, atender y/o suprimir todas las cuestiones que afecten a la salud pública
16 incluyendo las enfermedades infecciosas, contagiosas o epidémicas que amenazaren la
17 salud de los residentes de Puerto Rico;
- 18 d) Mantener estadísticas vitales y aquellas que fueran necesarias para la protección,
19 cuidado, mejoramiento y conservación de la salud pública;
- 20 e) Mantener constancia de los profesionales de la salud autorizados a ejercer en Puerto
21 Rico;
- 22 f) Definir la clase de aparatos sanitarios que deberán instalarse y conservarse en edificios
23 públicos y particulares;

- 1 g) Disponer sobre la inhumación y transporte de cadáveres;
- 2 h) Cualquier otra facultad, función, deber o poder establecido por la Constitución, Ley u
- 3 orden ejecutiva promulgada de conformidad con esta Ley.

4 **Artículo 3.09.- Departamento de Agricultura**

5 El Departamento de Agricultura tendrá la responsabilidad de implantar la política pública

6 y de establecer y llevar a cabo planes y programas dirigidos a promover, desarrollar y acrecentar

7 la economía agropecuaria. Tendrá también, entre otras, las siguientes facultades:

- 8 a) recolectar, compilar y difundir datos relativos a los mercados de productos agrícolas y
- 9 derivados de éstos en los puntos de venta y practicar, además, investigaciones
- 10 concernientes al mecanismo de distribución y comercialización de los productos de
- 11 Puerto Rico en los mercados;
- 12 b) promover, fomentar y facilitar el establecimiento y operación de las empresas
- 13 agropecuarias mediante el uso adecuado de infraestructura, terrenos, seguros y
- 14 tecnología disponible;
- 15 c) organizar los sectores agropecuarios para atender efectivamente los mercados locales,
- 16 nacionales e internacionales de productos de Puerto Rico, evaluando y promoviendo
- 17 un sistema distributivo de los mismos;
- 18 d) tomar medidas para evitar la entrada y propagación plagas, insectos u otros agentes
- 19 perjudiciales a las plantas;
- 20 e) inspeccionar la salud animal en proyectos pecuarios;
- 21 f) fiscalizar la integridad en el mercado de insumos agrícolas;

- 1 g) estudiar y hacer investigaciones relacionadas con los problemas, necesidades,
2 estrategias, planes y programas de los sectores agropecuarios y de las distintas
3 empresas que los constituyen;
- 4 h) Fomentar la producción sostenible, rentable y sustentable de alimentos;
- 5 i) velar por la inocuidad de alimentos e incentivar el consumo de alimentos sanos y
6 nutritivos;
- 7 j) desarrollar investigación científica y tecnológica con el propósito de mejorar la calidad
8 nutricional de los alimentos, la productividad y la salubridad alimentaria.
- 9 k) cualquier otra facultad, función, deber o poder establecido por la Constitución, Ley u
10 orden ejecutiva promulgada de conformidad con esta Ley.

11 **CAPÍTULO IV.- DISPOSICIONES DEROGATORIAS**

12 **Artículo 4.01.-** Se deroga la Ley Núm. 7 de 24 de julio de 1952, según enmendada.

13 **Artículo 4.02.-** Se deroga la Ley 182-2009, conocida como “Ley de Reorganización y
14 Modernización de la Rama Ejecutiva 2009”

15 **CAPÍTULO V.- DISPOSICIONES FINALES**

16 **Artículo 5.01- Disposiciones sobre los Empleados.**

17 Las disposiciones de esta Ley no podrán ser utilizadas como fundamento para el despido
18 de ningún empleado con un puesto regular. El personal que compone el Gobierno de Puerto Rico
19 a través de sus distintas agencias e instrumentalidades será asignado de conformidad con los
20 estatutos, reglamentos y normas administrativas aplicables a los mismos. De igual forma, todo
21 reglamento y transacción de personal deberá cumplir con lo establecido en la Ley 8-2017, según

1 enmendada, conocida como “Ley para la Administración y Transformación de los Recursos
2 Humanos en el Gobierno de Puerto Rico”.

3 Los empleados que como resultado de la reorganización del Gobierno sean transferidos,
4 conservarán todos los derechos adquiridos conforme a las leyes, normas, convenios colectivos y
5 reglamentos que les sean aplicables, así como los privilegios, obligaciones y estatus respecto a
6 cualquier sistema existente de pensión, retiro o fondo de ahorro y préstamo establecidos por ley, a
7 los cuales estuvieren acogidos antes de la aprobación de esta Ley y que sean compatibles con lo
8 dispuesto en la Ley 26-2017, conocida como “Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal”.

9 **Artículo 5.02.- Fondos Federales**

10 Toda orden ejecutiva promulgada de conformidad con esta Ley deberá salvaguardar los
11 fondos federales. A tales efectos, se dispone que cualquier cambio a un programa o agencia
12 conforme a esta ley se dejará sin efecto si el cambio tiene como resultado la pérdida de fondos
13 federales en un programa que se utilice en Puerto Rico.

14 **Artículo 5.03.– Falta de Autoridad y Legitimación Activa de Agencias.**

15 No obstante cualquier otra ley del Gobierno de Puerto Rico, ninguna agencia o entidad del
16 Gobierno de Puerto Rico cubierta por esta Ley tendrá autoridad o legitimación activa para
17 cuestionar la validez de esta Ley, de una orden ejecutiva promulgada de conformidad con la
18 misma, o de alguna actuación hecha por el gobernador o por otra entidad gubernamental o
19 funcionario público al amparo de esta Ley.

20 **Artículo 5.04.- Normas de Interpretación.**

21 Las palabras y frases usadas en esta Ley se interpretarán según el contexto y el significado
22 sancionado por el uso común y corriente y las reglas de hermenéutica reconocidas por nuestro
23 ordenamiento jurídico.

1 **Artículo 5.05.- Incompatibilidad.**

2 Esta Ley y toda acción tomada conforme a la misma, incluyendo las órdenes ejecutivas
3 promulgadas conforme a la delegación de poderes expresa establecida en esta Ley, deroga
4 cualquier ley orgánica, general o especial, artículo o sección de ley, normativa, convenios
5 colectivos, acuerdos, acuerdos suplementarios, órdenes administrativas, políticas, manuales de
6 empleo, cartas circulares, certificaciones, reglamentos, reglas y condiciones de empleo, cartas
7 normativas, planes de clasificación o retribución, cartas contractuales, y/o disposiciones
8 aplicables, o parte de la misma, que vaya en contra de las disposiciones de esta ley.

9 Las disposiciones de una Ley orgánica que cree una agencia operarán en la medida que no
10 sean incompatibles con la Ley del Nuevo Gobierno de Puerto Rico. A tales efectos, toda parte de
11 una Ley orgánica o especial que vaya en contra de una disposición específica de una orden
12 ejecutiva promulgada conforme a la Ley del Nuevo Gobierno de Puerto Rico, se considerará sin
13 efecto mientras exista tal incompatibilidad.

14 De igual forma, todo reglamento, normativa, acuerdo, orden administrativa, regla y/o
15 disposición legal aplicable que vayan en contra de las disposiciones de la Ley del Nuevo Gobierno
16 de Puerto Rico, así como de una disposición específica de una Orden Ejecutiva al amparo de dicha
17 Ley, se entenderá sin efecto de manera que se atempere a la nueva estructura administrativa.

18 **Artículo 5.06.- Supremacía.**

19 Las disposiciones de esta Ley, las órdenes ejecutivas promulgadas conforme a sus
20 disposiciones y los reglamentos o normas que se adopten de conformidad con la misma,

1 prevalecerán sobre cualquier otra disposición de ley, reglamento o norma que no estuviere en
2 armonía con los primeros.

3 **Artículo 5.07.-Separabilidad**

4 Si cualquier cláusula, párrafo, subpárrafo, oración, palabra, letra, artículo, disposición,
5 sección, subsección, título, capítulo, subcapítulo, acápite o parte de esta Ley fuera anulada o
6 declarada inconstitucional, la resolución, dictamen o sentencia a tal efecto dictada no afectará,
7 perjudicará, ni invalidará el remanente de esta Ley. El efecto de dicha sentencia quedará limitado
8 a la cláusula, párrafo, subpárrafo, oración, palabra, letra, artículo, disposición, sección, subsección,
9 título, capítulo, subcapítulo, acápite o parte de la misma que así hubiere sido anulada o declarada
10 inconstitucional. Si la aplicación a una persona o a una circunstancia de cualquier cláusula, párrafo,
11 subpárrafo, oración, palabra, letra, artículo, disposición, sección, subsección, título, capítulo,
12 subcapítulo, acápite o parte de esta Ley fuera invalidada o declarada inconstitucional, la
13 resolución, dictamen o sentencia a tal efecto dictada no afectará ni invalidará la aplicación del
14 remanente de esta Ley a aquellas personas o circunstancias en que se pueda aplicar válidamente.
15 Es la voluntad expresa e inequívoca de esta Asamblea Legislativa que los tribunales hagan cumplir
16 las disposiciones y la aplicación de esta Ley en la mayor medida posible, aunque se deje sin efecto,
17 anule, invalide, perjudique o declare inconstitucional alguna de sus partes, o aunque se deje sin
18 efecto, invalide o declare inconstitucional su aplicación a alguna persona o circunstancia. Esta
19 Asamblea Legislativa hubiera aprobado esta Ley sin importar la determinación de separabilidad
20 que el Tribunal pueda hacer.

21 **Artículo 5.08.- Vigencia**

22 Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación y tendrá vigencia
23 por un término de diez (10) años, a partir de la aprobación de la misma.